

Bogotá D.C., noviembre de 2021

Respetado
JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO
Secretario General
Cámara de Representantes
Ciudad

ASUNTO: Radicación proyecto de Ley “Por medio de la cual se establece la Política de Estado para el Desarrollo Integral en la Infancia y Adolescencia”.



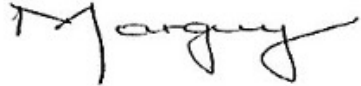
Respetado Secretario:

En nuestra condición de Congresistas, radicamos ante la Honorable Secretaría General de la Cámara de Representantes el proyecto de Ley “Por medio de la cual se establece la Política de Estado para el Desarrollo Integral en la Infancia y Adolescencia” para que sea puesto en consideración en la Honorable Cámara de Representantes. Cumpliendo con el pleno de los requisitos contenidos en la Ley 5 de 1992, y con la finalidad de iniciar el trámite legislativo de esta iniciativa adjunto a esta comunicación encontrará el texto original del proyecto de ley en versión digital.

De los Honorables Congresistas,



RUBY HELENA CHAGÜI SPATH
Senadora de la República
Autora principal

<p>JENNIFER KRISTIN ARIAS FALLA Representante a la Cámara por el Departamento del Meta</p>	<p> ADRIANA MAGALI MATIZ VARGAS Representante a la Cámara por el Tolima</p>
<p> ESTEBAN QUINTERO CARDONA Representante a la Cámara por Antioquia</p>	<p> AMANDA ROCIO GONZALEZ R. Senadora de la República</p>
<p> JUAN ESPINAL Representante a la Cámara por Antioquia</p>	<p> CARLOS FELIPE MEJÍA MEJÍA Senador de la República</p>
<p> EDWARD DAVID RODRIGUEZ R Representante a la Cámara por Bogotá D.C</p>	<p> JUAN PABLO CELIS VERGEL Representante a la Cámara</p>
<p> MARGARITA MARÍA RESTREPO Representante a la Cámara por Antioquia</p>	<p> MILLA PATRICIA ROMERO SOTO Senadora de la República</p>

 ALEJANDRO CORRALES ESCOBAR Senador de la República	 OSCAR LEONARDO VILLAMIZAR M Representante a la Cámara por Santander
 HENRY CUELLAR RICO Representante a la Cámara	 HERNAN HUMBERTO GARZON Representante a la Cámara
 MILTON HUGO ANGULO VIVEROS Representante a la Cámara	 ERNESTO MACÍAS TOVAR Senador de la República
 JOSE JAIME USCÁTEGUI PASTRANA Representante a la Cámara	 DIEGO JAVIER OSORIO JIMÉNEZ Representante a la Cámara Departamento del Quindío

 <p>JOSE VICENTE CARREÑO CASTRO Representante a la Cámara por el Departamento de Arauca</p>	 <p>MARTHA P. VILLALBA HODWALKER Representante a la Cámara</p>
 <p>JULIÁN PEINADO RAMÍREZ Representante a la Cámara Departamento de Antioquia</p>	 <p>ESPERANZA ANDRADE SERRANO Senadora de la República Partido Conservador Colombiano</p>
 <p>Harry Giovanni González García Representante a la Cámara Departamento del Caquetá</p> 	

Proyecto de Ley ___ de 2021

“Por medio de la cual se establece la Política de Estado para el Desarrollo Integral en la Infancia y Adolescencia”

EL CONGRESO DE COLOMBIA

Decreta:

TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto elevar la Política Nacional de Infancia y Adolescencia 2018 – 2030 a Política de Estado para el Desarrollo Integral en la Infancia y la Adolescencia, la cual sienta las bases conceptuales, técnicas y de gestión para garantizar el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes entre los seis (6) y los dieciocho (18) años, en el marco de la Doctrina de la Protección Integral.

Artículo 2°. Marco de la Política Nacional de Infancia y Adolescencia. Esta Política, tendrá a las niñas, niños y adolescentes en el centro de la agenda como sujetos titulares de derechos en la acción pública, cuya garantía debe materializarse a nivel colectivo e individual, con participación genuina y significativa acorde con sus capacidades y momento del curso de vida, goce efectivo de los derechos y ejercicio de la ciudadanía como agentes de cambio y transformación social y cultural desde la diversidad. El Estado, la familia y la sociedad, como corresponsables en la garantía de derechos de las niñas, los niños y los adolescentes, se relacionarán con ellos, reconociendo su capacidad de incidir en el entorno y de ejercer sus derechos.

Esta Política es de carácter intersectorial en el orden nacional y territorial, y exige la articulación y conexiones entre los diferentes sistemas y sectores para su diseño, implementación y seguimiento.

Artículo 3°. Definiciones. Para efectos de la presente ley, a continuación, se establecen dos tipos de definiciones basadas en los acuerdos y desarrollos conceptuales de la política: conceptos propios de la infancia y adolescencia y conceptos relativos a la gestión de la política, sin perjuicio de las definiciones estipuladas en la Ley 1098 de 2006, siguientes términos:

- a. **Niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos:** La Política Nacional de Infancia y Adolescencia, reconoce a niñas, niños y adolescentes como sujetos titulares y prevalentes de derechos. Se comprenden como sujetos plurales y

diversos, lo que implica valorar las variables personales, sociales, culturales y de género, que los constituyen. Es en la convergencia de estas variables que se hacen visibles las particularidades que permiten reconocer la existencia de infancias y adolescencias, distantes de miradas unívocas y homogéneas que matizan las diversas formas de ser y expresarse como niña, niño y adolescente, así como la aproximación a las situaciones y contextos en los que viven.

Desde la perspectiva del desarrollo integral, niñas, niños y adolescentes son concebidos como seres holísticos con capacidades propias para ejercer sus derechos y conseguir las metas de realización que responden al propósito de configurarse una vida propia, auténtica y con sentido personal, social, cultural e histórico.

- b. Desarrollo integral.** El desarrollo integral es entendido como un proceso de transformación continuo, complejo y sistémico que vive el ser humano a partir de sus capacidades, habilidades, potencialidades y experiencias, que contribuye a la construcción de su identidad, al logro progresivo de la autonomía para edificar su vida y al afianzamiento del sentido colectivo y social que definen a los sujetos.

El desarrollo se concibe como un proceso multidimensional, multidireccional y multideterminado. Las dimensiones y procesos del desarrollo se entretajan, interactúan y se enlazan siempre con el contexto, lo que de alguna manera potencia o restringe procesos con mayor alcance para el sujeto. El desarrollo es continuo porque este proceso tiene inicio desde la gestación, se mantiene a lo largo de la vida de manera singular y es consecuente con lo acontecido en el transitar vital de cada sujeto.

- c. Transiciones en la infancia y la adolescencia.** Desde el enfoque de curso de vida, las transiciones hacen referencia a eventos o situaciones que implican un cambio de estado, posición o situación de un individuo en un momento determinado durante una trayectoria, lo cual no es predeterminado ni necesariamente previsible, pero que son reconocibles en la experiencia del ser humano dado que requieren un proceso de adaptación de éste al cambio realizado, y que a su vez delimita las formas de participación y los roles que asumen las personas al interior de un determinado orden social. ,Durante la infancia y adolescencia se pueden caracterizar 3 momentos de transición en los que los cambios se expresan de manera más explícita y visible: i) de la primera infancia a la infancia, ii) de la infancia a la adolescencia y iii) de la adolescencia a la juventud. No obstante, existen procesos de transición determinados por situaciones esperadas o no esperadas, como el paso (de la escuela al trabajo, de la familia de origen a la formación de una nueva familia, etc., y que además en su singularidad y condiciones – situaciones, cada sujeto puede vivir procesos de cambio que transformen drásticamente su trayectoria.

- d. Trayectorias.** Se refiere al recorrido que realiza un ser humano por los diferentes roles (trabajo, escolaridad, familia, migración, pertenencia a grupos sociales, etc.) en que se desenvuelve sin que esto implique una velocidad o secuencia particular o predeterminada de eventos. Se comprende como la línea de vida o el camino que se cursa a lo largo de la vida, y puede variar o cambiar de dirección. Este recorrido se expresa en la consolidación de sus intereses, capacidades y habilidades; se hacen visibles en sus formas de ser, estar, comprender y proceder; y respaldan el propósito humano de configurarse una vida propia, auténtica, con sentido, que construye y transforma. Desde una perspectiva relacional, considera que los individuos, familia y comunidad, se desarrollan a través de trayectorias que se entrecruzan, interactúan y se determinan entre sí, por ello la conjunción y análisis de todas las trayectorias de los individuos, sus familias y comunidades, configuran el análisis desde el enfoque de curso de vida.
- e. Realizaciones.** Las realizaciones son aquellas condiciones y estados que se materializan en las vidas de las niñas, niños y adolescentes a partir de las interacciones que establecen en los entornos por los que transitan y se desarrollan, y que evidencian que sus derechos están siendo ejercidos.

La concurrencia de estas realizaciones en calidad de derechos ejercidos, asegura condiciones óptimas para el desarrollo integral, permite profundizar en el alcance que debe tener la actuación del Estado en favor de las niñas, niños y adolescentes. La Política Nacional de Infancia y Adolescencia define ocho realizaciones que, enunciadas de manera singular afirman que cada niña, niño o adolescente:

1. Cuenta con una familia que le acoge y acompaña en su desarrollo, junto con los pares, redes y organizaciones sociales y comunitarias.
2. Disfruta del nivel más alto posible de salud, vive y asume modos, estilos y condiciones de vida saludables y cuenta con óptimas condiciones de alimentación y nutrición.
3. Participa de procesos de educación y formación integral que desarrollan sus capacidades, potencian el descubrimiento de su vocación y el ejercicio de la ciudadanía.
4. Construye su identidad desde el respeto y valoración de la diversidad.
5. Goza y cultiva sus intereses en torno a las artes, la cultura, el deporte, el juego y la creatividad.
6. Participa y expresa libremente sentimientos, ideas y opiniones y decide sobre todos los asuntos que le atañen.
7. Realiza prácticas de autoprotección y crece en entornos protectores donde se actúa de manera oportuna y efectiva para la exigibilidad de la garantía de derechos, la prevención frente a situaciones de riesgo o vulneración de estos y su restablecimiento.
8. Construye su sexualidad de manera libre, autónoma y responsable.

- f. **Entornos.** Son los escenarios en los que las niñas, niños y adolescentes viven, se desarrollan, transitan, edifican sus vidas, comparten y establecen vínculos y relaciones con la vida social, histórica, cultural y política de la sociedad a la que pertenecen. Se ubican en lo rural o en lo urbano. Están configurados por relaciones, dinámicas y condiciones sociales, físicas, ambientales, culturales, políticas y económicas, alrededor de las cuales las personas, las familias y las comunidades conviven produciéndose una intensa y continua interacción y transformación entre ellos y el contexto que les rodea. Esta Política identifica los entornos hogar, salud, educativo, comunitario y espacio público, laboral, institucional y virtual.
- g. **Atención Integral.** Es el conjunto de acciones intersectoriales, intencionadas, relacionales y efectivas encaminadas a asegurar que en los entornos donde transcurren las vidas de las niñas, niños y adolescentes existan las condiciones sociales, humanas y materiales que garantizan la promoción y potenciación de su pleno desarrollo. Estas acciones son planificadas, continuas y permanentes, de carácter técnico, político, programático, financiero y social, del orden nacional y territorial.

Además, reconoce y respeta la diversidad que se manifiesta en las características propias de los individuos, familias y colectivos en relación con la identidad, el territorio, la historia, los valores, las creencias y los saberes propios que desde la cultura y la experiencia de vida dan significado a su existencia.

Los componentes de la Atención integral de la Política de estado para el Desarrollo Integral en la Infancia y la Adolescencia son: Bienestar y salud; Educación y formación para la vida; Construcción de identidad, participación y ejercicio de la ciudadanía; Disfrute, exploración y expresión de intereses, vocaciones y talentos; Vinculación afectiva y relaciones de cuidado. En el marco de la atención integral, la oferta sectorial debe contemplar acciones relacionadas con estos cinco componentes de acuerdo con su competencia y las posibilidades que ofrece la gestión intersectorial.

- h. **Ruta Integral de Atenciones.** Es la herramienta que consolida el conjunto de acciones necesarias para configurar y garantizar la atención integral de las niñas, niños y adolescentes. Contribuye a ordenar la gestión de la atención integral en el territorio de manera articulada, consecuente con la situación de derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, con la oferta de servicios disponible y ajustados a las características de las niñas y los niños en sus respectivos contextos. Como herramienta de gestión intersectorial convoca a todos los actores del Sistema Nacional de Bienestar Familiar con presencia, competencias y funciones en el territorio.

Como destinatarios de las atenciones identificadas en la Ruta Integral de Atenciones de la infancia y la adolescencia además de las niñas, niños y adolescentes, se

contemplan a su vez, atenciones dirigidas a las familias y a las comunidades en tanto estas cumplen un papel fundamental en el acompañamiento a la experiencia de vida de las nuevas generaciones.

- i. **Atenciones.** Son acciones efectivas que recaen sobre las niñas, niños y adolescentes que tienen como característica intrínseca asegurar las condiciones y posibilidades para que las niñas, niños y adolescentes puedan construir y disfrutar de su vida con plena autonomía en el ejercicio de sus derechos y libertades.

Estas atenciones tienen como referentes los derechos, el proceso de desarrollo de las niñas, niños y adolescentes, las realizaciones y los componentes de la atención integral definidos previamente, a fin de garantizar que en su conjunto posibilitem la materialización de los derechos y la promoción del desarrollo de quienes se encuentran en la infancia y la adolescencia.

- j. **Seguimiento al desarrollo de niñas, niños y adolescentes.** Comprende la recolección de información de las atenciones definidas en el marco de la integralidad. Demanda de cada uno de los sectores el desarrollo de fuentes de información nominales de las atenciones que son de su competencia, así como los procesos y procedimientos para su transferencia al sistema de seguimiento; y desde lo intersectorial, el análisis en contexto de la integralidad de la atención y generación de alertas tempranas en los entornos en los que se desarrollan para garantizar la atención.

Artículo 4°. Principios rectores. La Política Nacional de Infancia y Adolescencia se rige por los principios consagrados en la Constitución Política, en la Convención de los Derechos del Niño– Ley 12 de 1991 y en el Código de la Infancia y la Adolescencia - Ley 1098 de 2006, resaltando entre ellos los principios rectores de protección integral, no discriminación, observancia del interés superior de la niñez, el valor absoluto de la vida, la garantía de la supervivencia y el desarrollo de niñas, niños y adolescentes, a participar y ser escuchado; los cuales están orientados a asegurar la garantía de los derechos para todas las niñas, niños y adolescentes y el cumplimiento de los mismos en todo el territorio nacional y son de carácter irrenunciable y de aplicación preferente.

Artículo 5°. Enfoques. La Política de Estado establecida mediante la presente ley, asume e integra los siguientes enfoques sobre los cuales se orienta y fundamenta su marco de acción:

- a. **Enfoque basado en los derechos humanos y la doctrina de la protección integral.** Este enfoque comprende los principios universales y el reconocimiento del compromiso y obligatoriedad estatal de la garantía y protección integral de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes, en lo individual o colectivo y en atención a sus capacidades de desarrollo, mediante el reconocimiento de estos

como sujetos titulares de derechos, promocionando su desarrollo integral, la prevención de la vulneración, la garantía y el restablecimiento de sus derechos.

- b. Enfoque de género.** Este enfoque identifica y genera acciones dirigidas a la promoción de la equidad entre géneros, en términos de sus derechos, logro de autonomía y condiciones de vida. Este enfoque identifica cómo se definen las expectativas y pautas de comportamiento adquiridas previa o principalmente durante la niñez, estableciéndose así la diferenciación entre géneros. Estos procesos se convierten en un contenido determinante para la resolución y definición de identidad propia de estos momentos de vida.
- c. Perspectiva de diversidad y enfoque diferencial.** Esta perspectiva reconoce y exalta la diversidad individual, cultural, étnica, social e histórica, el análisis de las particularidades de los sujetos individuales y colectivos en sus condiciones y contextos, las cuales exigen formas de comprensión y acción social y política distintas y específicas. El enfoque diferencial implica acciones afirmativas y diferenciales para la promoción del goce de los derechos de todas las personas considerando el reconocimiento de condiciones constitutivas de edad, etnia, discapacidad, así como condiciones sociales, políticas, culturales, religiosas y económicas y las afectaciones por violencias (social y política), de ubicación geográfica (urbana o rural) y la situación legal.
- d. Enfoque de desarrollo humano.** Tiene una relación ineludible con los derechos humanos, donde estos se asumen como libertades humanas. Permite el reconocimiento y desarrollo de capacidades para avanzar en sus metas de realización y en el ejercicio de los derechos. Contempla un concepto amplio de autonomía como expresión del desarrollo humano, que desarrolla la libertad.
- e. Enfoque de curso de vida.** Este enfoque constituye una perspectiva que permite reconocer -en los distintos momentos del curso de vida- trayectorias, sucesos, transiciones, ventanas de oportunidad y efectos acumulativos que inciden en el desarrollo de los sujetos, reconociendo la incidencia de múltiples condiciones históricas, sociales, culturales, biológicas y psicológicas.
- f. Enfoque interseccional.** Este enfoque se considera como una opción clave que complementa la perspectiva analítica para vincular en interdependencia el conjunto de variables que configuran a los sujetos y su subjetividad. Si bien su origen parte de las reivindicaciones y los desarrollos desde el enfoque de género, tienen aplicabilidad en general en las políticas públicas con énfasis poblacional.

Artículo 6°. Componentes de la atención integral. Los componentes de la atención integral a los que se refiere la presente Política de Estado definen la manera en la que se organiza la atención enfocada a una gestión que contribuye a promover el desarrollo

integral de niñas, niños y adolescentes y la realización de sus derechos. Los componentes corresponden a:

- a. **Bienestar y Salud.** Abarca las acciones que conducen a garantizar el bienestar de las niñas, niños y adolescentes, el disfrute de una vida sana y la prevención de condiciones que lo alteren mediante la promoción y el acompañamiento, alrededor de prácticas de cuidado y autocuidado, el fomento de estilos de vida saludables, una alimentación adecuada y el ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos y la relación armónica con el ambiente y la naturaleza, en su relación consigo mismo y con el otro.
- b. **Educación y formación para la vida.** Contempla las acciones tendientes a promover el desarrollo y profundización de las capacidades, habilidades e intereses que movilizan la vida de las niñas, niños y adolescentes en el contexto de su trayectoria educativa. Contempla la generación de oportunidades, experiencias y escenarios significativos para poder acceder a la información, aprender, crear, expresar, explorar, apropiarse y transformar los saberes, conocimientos, emociones, su cultura, y le contribuyan a perfilar su proyecto de vida.
- c. **Construcción de identidad, participación y ejercicio de la ciudadanía.** Parte de reconocer que la participación como derecho es diferencial en el curso de vida, su pleno ejercicio en asuntos de su interés requiere de capacidades que se adquiere de manera gradual. En ese sentido, comprende las acciones que buscan fortalecer en las niñas, niños y adolescentes la configuración de la conciencia de sí mismo, el autoconcepto, el sentido de pertenencia colectiva, el pleno reconocimiento de la diversidad, así como aquellas que promueven su participación, la ampliación de su capacidad de agencia y la consolidación de sus competencias ciudadanas. Contempla las acciones que reconocen a niñas, niños y adolescentes como sujetos capaces de transformar sus entornos, incidir, tomar decisiones, emitir sus propios juicios y ejercer su ciudadanía.
- d. **Disfrute, exploración y expresión de intereses, vocaciones y talentos.** Implica acciones que favorecen la autodeterminación de las niñas, niños y adolescentes para el ejercicio libre y autónomo del goce, el descanso y la diversión, así como para la exploración o el perfeccionamiento de sus habilidades, capacidades y potencialidades en el desarrollo de disciplinas y actividades que sean de su interés y en la expresión de ideas, pensamientos y sentimientos a través del uso creativo de los símbolos verbales, corporales, sonoros, plásticos o visuales.

Así mismo, contribuye a la construcción de la propia identidad y el desarrollo del sentido de pertenencia a partir del reconocimiento, apropiación y disfrute en torno al conocimiento de la historia, de las memorias, de la cultura, las artes, la recreación, los deportes y actividades físicas propias, la ciencia, la tecnología, las

manifestaciones y expresiones del patrimonio cultural inmaterial y los bienes del patrimonio cultural material.

- e. **Vinculación afectiva y relaciones de cuidado.** Considera las acciones tendientes a favorecer y fortalecer relaciones vinculantes y recíprocas de las niñas, niños y adolescentes con ellos mismos, con los otros y con su entorno, como aspecto fundamental para su desarrollo y como medio para promover el cuidado de sí y de los demás, el buen trato y la prevención frente al riesgo. La red vincular incluye en primera medida las familias, los grupos de pares y las comunidades, enmarcadas en la relación armónica con el ambiente y la naturaleza.

Artículo 7°. Ámbito de aplicación. La Política de Estado para el Desarrollo Integral en la Infancia y la Adolescencia adoptada mediante la presente ley, debe ser aplicada por las entidades del orden nacional y territorial, la sociedad civil organizada y demás agentes del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, y en general, por todos los actores públicos y privados que tienen incidencia en la generación de condiciones que favorecen el proceso de desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes entre los seis (6) y los dieciocho (18) años, según los principios rectores y enfoques de la política y de acuerdo con su rol y competencias, en consonancia con lo previsto los artículos 10 y 204 de la ley 1098 de 2006.

TÍTULO II MARCO DE GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE ESTADO

Artículo 8°. Gestión intersectorial para la atención integral. La gestión de la Política de Estado para el Desarrollo Integral en la Infancia y la Adolescencia tiene carácter intersectorial, tanto a nivel nacional como territorial. Exige articulación y conexiones entre sistemas, niveles y sectores en su diseño e implementación, que den cabida al reconocimiento de los sujetos, a las prioridades locales, a lograr la coherencia y consistencia de las acciones y a la búsqueda del logro del objetivo, como una experiencia permanente de gobernabilidad, a partir de la construcción de acuerdos con todos los sectores sobre una visión de país respecto al desarrollo integral en la infancia y la adolescencia.

Por gestión intersectorial para la atención integral se entiende la acción organizada, concurrente y coordinada a través de la cual los sectores estatales de los órdenes nacional y territorial (educación, salud, cultura, recreación, bienestar, deportes, planeación, entre otros), así como otros actores de la sociedad (familias, comunidad, grupos étnicos, sociedad civil, academia, empresa privada, organizaciones no gubernamentales, organizaciones juveniles, de género, conformada por ellas y ellos entre otras), se articulan para lograr la atención integral de los niños, niñas y adolescentes.

En este sentido, ubica a las niñas, niños y adolescentes en el centro de la acción del Estado y se materializa a través de las acciones conjuntas y por separado que ejecutan los sectores

y las entidades para generar las condiciones de bienestar, acceso a oportunidades con equidad e incidencia de las niñas, niños y adolescentes en la transformación del país.

Para llevar a cabo estas acciones, se requieren: i) integralidad de las atenciones mediante las cuales se generan las condiciones que favorecen el pleno desarrollo, ii) intersectorialidad, reconociendo el lugar de cada uno de los sectores y los grupos, la potencia de las intersecciones y el imperativo de la acción colegiada y iii) el seguimiento uno a uno de las niñas, niños y los adolescentes, que permitan identificar la concurrencia en las atenciones, y ponderar así la atención integral.

Exige que cada actor involucrado reconozca la importancia central de su mandato institucional para la garantía de los derechos y la generación de condiciones que promueven el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes, ya sea en el ámbito de la orientación, la planeación, la oferta de servicios, la articulación o el seguimiento a la atención integral, y ponga al servicio de ellos sus saberes, estructura institucional, acciones de política, recursos y capacidades, así como su apertura para transformarse.

La gestión intersectorial en el orden territorial se inscribe en el marco del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, como mecanismo fundamental de implementación de la Política de Estado para el Desarrollo Integral en la Infancia y la Adolescencia.

El cometido de la gestión intersectorial es lograr un trabajo articulado y sinérgico que dé como resultado una atención integral oportuna y pertinente a cada niña, niño y adolescente, de acuerdo con los lineamientos definidos por esta política en cuanto a su formulación, implementación y seguimiento.

Artículo 9°. Líneas de acción. La Política de Estado para el Desarrollo Integral en la Infancia y la Adolescencia se desarrolla en las siguientes líneas estratégicas para dinamizar y dar sostenibilidad a su gestión:

- a. Fortalecimiento institucional.** Esta línea de acción asegura que se generen y consoliden las condiciones requeridas de estructura y capacidad institucional y financiera, que hagan sostenibles en el largo plazo las acciones para el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, de acuerdo con las particularidades propias de la población y su contexto. Incluye las acciones de fortalecimiento de la gestión sectorial e intersectorial nacional y territorial, lo que implica la adecuación de la arquitectura institucional, el desarrollo de las capacidades de los servidores públicos y la promoción de la descentralización y la autonomía territorial para la atención integral en la infancia y la adolescencia.
- b. Calidad y pertinencia de las atenciones.** Constituye la gestión de acciones intencionadas efectivas, oportunas, diferenciales, continuas y flexibles, dirigidas a garantizar y promover el ejercicio de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes, de acuerdo con sus particularidades y el contexto en el que se

desenvuelven sus vidas. En este sentido, implica garantizar y cualificar la cobertura, el acceso, la permanencia y la calidad de la oferta que contribuye a hacer realidad las realizaciones, a través de programas, proyectos y servicios, entre otras acciones.

- c. **Participación, movilización y ciudadanía.** Desde esta línea se generan procesos de movilización social a favor de la centralidad de la infancia y la adolescencia en la agenda pública. Así mismo, visibilizar y crear las condiciones para que las niñas, los niños y los adolescentes sean agentes de cambio en lo social, político, económico, ambiental y cultural. Incluye estrategias de comunicación y acciones que promuevan su participación significativa en todos los escenarios sociales, culturales, políticos y familiares. También plantea la vinculación de la academia, las organizaciones de la sociedad civil y la cooperación nacional e internacional, en el desarrollo de la Política.
- d. **Seguimiento, evaluación y gestión de conocimiento.** Esta línea se orienta a contribuir en la toma de decisiones basada en la evidencia, dado que genera insumos e información estratégica sobre los avances y retos nacionales y territoriales en el cumplimiento de los objetivos de esta Política.

Artículo 10°. Prioridad de las atenciones. En la ejecución e implementación de la Política de Estado para el Desarrollo Integral en la Infancia y la Adolescencia, se toma en consideración la diversidad de configuraciones de niñas, niños, adolescentes y sus familias en razón de su cultura, pertenencia étnica, contexto, condiciones, dimensiones particulares o afectaciones transitorias, así como la prioridad de su atención ante situaciones de vulnerabilidad.

Artículo 11°. Focalización. La focalización de la población a ser atendida de forma prioritaria con los recursos oficiales de carácter nacional o territorial, debe realizarse de manera coordinada entre las autoridades gubernamentales del orden nacional y territorial en los escenarios del Consejo de Política Social Municipal, Distrital y Departamental, en consonancia con el análisis de la situación de derechos y de servicios, y las atenciones de la Ruta Integral de Atenciones. La focalización se hará teniendo en cuenta: la vulnerabilidad de las niñas, niños y adolescentes, las brechas sociales y económicas, la inclusión y participación de las niñas, niños y adolescentes, de la población en condición de discapacidad, la pobreza rural, la población afectada por el conflicto armado y la pertenencia a grupos étnicos.

Artículo 12°. Fases para la implementación. En el ámbito de los Consejos Nacional, Departamental, Distrital y Municipal de Política Social, en armonía con lo previsto en el Código de Infancia y Adolescencia – Ley 1098 de 2006, la Política de Estado para el Desarrollo Integral en la Infancia a Adolescencia, se deberá implementar en las siguientes fases:

- a. **Identificación.** En esta fase se identifica el estado de realización de los derechos de las niñas, niños y adolescentes por momentos del curso de vida y entornos de

desarrollo, analizado en la perspectiva de la Ruta Integral de Atenciones -RIA-, las atenciones y la oferta pública y privada disponible dirigida a esta población. Esta información dará los elementos para la focalización de acciones y prioridades a nivel territorial. También se movilizará la participación de las niñas, niños y adolescentes, de las entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y de otros actores sociales a través de los Consejos de Política Social y espacios creados para este fin, que permitan la coordinación y reflexión sobre las prioridades, lineamientos y acciones de la política.

- b. Formulación.** A partir del diagnóstico sobre la realización de los derechos y la Ruta Integral de Atenciones local se deberán plantear las mejores alternativas para garantizar de forma progresiva el goce efectivo de los derechos de las niñas, niños, y adolescentes en el territorio. Para tal fin se formulará el plan de acción con los objetivos, las metas, los indicadores de gestión y de resultado, las acciones, los recursos y los responsables para la ejecución de la Ruta Integral de Atenciones, de manera complementaria a las políticas existentes. En esta fase se promoverá la participación efectiva de las niñas, niños y adolescentes en los espacios de diálogo y reflexión para la definición de las prioridades.
- c. Implementación.** En esta fase, se materializan las acciones de política como planes, programas y servicios, para la ejecución de la Ruta Integral de Atenciones local planteada en el plan de acción. El proceso de ejecución debe estar soportado en los principios de intersectorialidad, sostenibilidad, coordinación, complementariedad y concurrencia entre los distintos actores involucrados y niveles de gobierno.
- d. Seguimiento y Evaluación.** El seguimiento de la ejecución de la Ruta Integral de Atenciones se hará por parte de las instancias de coordinación de infancia y adolescencia en el marco de los Consejos de Política Social y las mesas de infancia y adolescencia sobre la base de metas progresivas planteadas en el plan de acción. La evaluación de los resultados alcanzados guiará nuevos cursos de acción en la medida que se vayan alcanzando los objetivos propuestos. De los resultados se hará un ejercicio de divulgación y movilización social que permita a las niñas, niños y adolescentes, así como a los actores de la sociedad civil, academia y ciudadanía conocer los resultados de la gestión para la garantía de los derechos de la infancia y adolescencia.

TÍTULO III COMPETENCIAS Y FUNCIONES INSTITUCIONALES Y PARTICIPACIÓN DE OTROS ACTORES

Artículo 13°. Coordinación de la Política de Estado para el Desarrollo Integral en la Infancia y la Adolescencia. La coordinación, articulación y gestión intersectorial de la

presente Política, estará a cargo de la Comisión Intersectorial para el Desarrollo Integral en la Infancia y la Adolescencia.

Con el fin de lograr la implementación coordinada y efectiva de la Política de Estado para el Desarrollo Integral en la Infancia y la Adolescencia, en el marco del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, se articularán y definirán los mecanismos de trabajo conjunto con las instancias del SNBF, agencias, organismos, sociedad civil, academia y comisiones intersectoriales o espacios de concertación de grupos sociales o étnicos o de trabajo interinstitucional que aborden temas relacionados con las transiciones desde la primera infancia hasta la juventud.

Artículo 14°. Comisión Intersectorial para el Desarrollo Integral en la Infancia y la Adolescencia. La Comisión Intersectorial para el Desarrollo Integral en la Infancia y la Adolescencia tiene por objeto la coordinación, articulación y seguimiento de la Política Nacional de Infancia y Adolescencia, así como definir los principios y lineamientos técnicos para la implementación nacional y territorial de la Política, en el marco del Sistema Nacional de Bienestar Familiar.

Artículo 15°. Integración de la Comisión Intersectorial para el Desarrollo Integral en la Infancia y la Adolescencia. La Comisión Intersectorial para el Desarrollo Integral en la Infancia y la Adolescencia estará integrada por:

1. El delegado del presidente de la República, que deberá ser el Consejero Presidencial para la Niñez y la Adolescencia o quien haga sus veces.
2. El Consejero Presidencial para la Juventud o quien haga sus veces.
3. El ministro de Salud y Protección Social o su delegado, que deberá ser un viceministro.
4. El ministro de Trabajo o su delegado, que deberá ser un viceministro.
5. El ministro de Educación Nacional o su delegado, que deberá ser un viceministro.
6. El ministro de la Tecnología de la Información y de las Comunicaciones o su delegado, que deberá ser un viceministro.
7. El ministro de Cultura o su delegado que deberá ser un viceministro.
8. El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación o su delegado que deberá ser un viceministro.
9. El ministro de Deporte o su delegado, que deberá ser un viceministro.
10. El director del Departamento Nacional de Planeación o su delegado, que deberá pertenecer al nivel directivo.
11. El director del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social o su delegado que deberá pertenecer al nivel directivo.
12. El director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF o su delegado, que deberá pertenecer al nivel directivo.

Parágrafo 1. La comisión será presidida y coordinada por el delegado del presidente de la República.

Parágrafo 2. Con el propósito de implementar y desarrollar acciones en el marco de la Política Nacional de Infancia y Adolescencia, la Comisión se articulará con otras entidades, dependencias o instancias de coordinación, cuya misionalidad esté relacionada con alguna de las líneas de acción de la Política. Igualmente, esta instancia se articulará con otras comisiones interinstitucionales encargadas de gestionar líneas de política asociadas a esta población.

Artículo 16°. Funciones de las entidades en el marco de la política de estado para el desarrollo integral en la infancia y la adolescencia. De conformidad con la misión institucional de cada una de las entidades que integran la Comisión es imprescindible señalar su aporte en el logro del objetivo e implementación de esta Política, de manera que se posibilite la articulación y coordinación necesarias a través de las funciones que se definen en los siguientes artículos de la presente ley.

Artículo 17°. Funciones de La Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia.

- a) Presidir, coordinar y ejercer la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial para el Desarrollo Integral en la Infancia y la Adolescencia.
- b) Presidir el Comité Técnico de la Comisión Intersectorial para el Desarrollo Integral en la Infancia y la Adolescencia.
- c) Promover y coordinar los mecanismos de articulación y cooperación interinstitucional para la implementación, fortalecimiento y sostenibilidad de la Política de Estado para el Desarrollo Integral en la Infancia y la Adolescencia

Artículo 18°. Funciones de La Consejería Presidencial para la Juventud.

- a) Coordinar y articular el diseño e implementación de planes, programas y políticas que promuevan el tránsito armónico de la adolescencia a la juventud, en coherencia con la Política de Estado para el Desarrollo Integral en la Infancia y la Adolescencia.

Artículo 19°. Funciones del Ministerio de Salud y Protección Social.

- a) Formular, implementar y evaluar políticas, planes, programas y proyectos para la promoción de la salud, gestión integral del riesgo en salud y gestión de la salud pública en el marco de la Política de Estado para el Desarrollo Integral en la Infancia y la Adolescencia.

Artículo 20°. Funciones del Ministerio del Trabajo

- a) Liderar la Línea de Política Pública para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección Integral al Adolescente Trabajador, cuyo objetivo comprende la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, así como garantizar el ejercicio pleno de derechos del adolescente trabajador, mediante la protección integral de

niñas, niños y adolescentes, tomando como unidad de intervención a ellas y ellos junto a sus familias.

- b) Identificar, registrar y caracterizar el trabajo infantil y sus peores formas a través del Sistema de Información Integrado – SIRITI - como principal fuente de información de trabajo infantil, que permite capturar, analizar, consolidar y articular la información sobre la vinculación de Niñas, Niños y Adolescentes al trabajo infantil y sus peores formas, para hacerla accesible y útil a todas las entidades involucradas en el restablecimiento de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, permitiendo hacer un monitoreo y control general de las acciones que gobernaciones y alcaldías realicen en la prevención y erradicación de trabajo infantil en sus territorios.
- c) Articular y armonizar la línea de política pública de prevención y erradicación de la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes con la Política de Estado para el Desarrollo integral en la Infancia y la adolescencia.

Artículo 21°. Funciones del Ministerio de Educación Nacional.

- a) Liderar, formular, armonizar, divulgar y posicionar los lineamientos, referentes técnicos y orientaciones pedagógicas y curriculares que guíen la implementación, evaluación y ajuste de los procesos educativos en correspondencia con la presente Política de Estado.
- b) Formular, implementar y evaluar políticas, planes, programas y proyectos para la promoción de experiencias educativas significativas para el desarrollo y profundización de las capacidades, habilidades, talentos y expresión libre de niños, niñas y adolescentes, desde sus intereses y aspiraciones, en coherencia con lo establecido en la presente política.
- c) Construir el lineamiento y orientaciones técnicas para el trabajo con las familias en el marco de la alianza Familia Escuela de que trata la Ley 2025 de 2020 en correspondencia con la presente Política de Estado, dirigidas a potenciar el rol familiar frente a la educación, el cuidado y la crianza de niñas, niños y adolescentes.
- d) Orientar la articulación intersectorial para la gestión del servicio educativo en el marco de la Ruta integral de Atenciones y en los escenarios del Consejo de Política Social Municipal, Distrital y Departamental, para el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes.
- e) Administrar y poner en marcha el Sistema de Seguimiento al Desarrollo Integral en la Infancia y Adolescencia, así como dictar los lineamientos técnicos para el reporte de información y todos aquellos aspectos que resulten pertinentes para su adecuado funcionamiento, en consonancia con lo establecido en la presente ley.

Artículo 22°. Funciones Ministerio de la Tecnología de la Información y de las Comunicaciones

- a) Formular e implementar políticas, planes y proyectos relacionados con las tecnologías de la información y las comunicaciones para niñas, niños y adolescentes, que favorezcan la apropiación y masificación de las tecnologías, como

instrumentos que facilitan el bienestar y el desarrollo personal y social, en el marco de lo planteado por la presente ley.

Artículo 23°. Funciones del Ministerio de Cultura.

- a) Formular e implementar políticas, planes, programas y proyectos dirigidos a preservar, promover y reconocer los derechos culturales de las niñas, los niños, los adolescentes y sus familias en el marco de la Política de Estado para el Desarrollo Integral en la Infancia y la Adolescencia, sobre el reconocimiento de la diversidad poblacional, territorial étnica, lingüística y social del país, lo que obliga a una acción diferencial y sin daño.
- b) Dar directrices para el fomento de los lenguajes y expresiones artísticas y culturales la literatura y la lectura en infancia y adolescencia, la creación, producción y distribución de contenidos digitales.

Artículo 24°. Funciones del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

- a) Diseñar e implementar políticas, planes, programas orientados a la promoción del desarrollo de la vocación científica y tecnológica en niñas, niños y adolescentes, en el marco de la Política de Estado para el Desarrollo Integral en la Infancia y la Adolescencia.

Artículo 25°. Funciones del Ministerio del Deporte.

- a) Formular e implementar políticas, programas y proyectos, con criterio de inclusión y equidad social sobre el deporte, la recreación y la actividad física para niñas, niños y adolescentes en el marco de la Política de Estado para el Desarrollo Integral en la Infancia y la Adolescencia.

Artículo 26°. Funciones del Departamento Nacional de Planeación.

- a) Acompañar y apoyar técnicamente la formulación, implementación, evaluación y seguimiento de la Política de Estado para el Desarrollo Integral en la Infancia y la Adolescencia, en sus componentes de política pública, territoriales y presupuestales.
- b) Realizar seguimiento y evaluación de efectividad, eficacia e impacto de la política de Estado para el desarrollo integral en la Infancia y la Adolescencia.
- c) Orientar y apoyar técnicamente los procesos de planeación, programación, ejecución y evaluación de la inversión pública en Niñez, para el fortalecimiento de los presupuestos y sostenibilidad de la Política de Estado para el Desarrollo Integral en la Infancia y la Adolescencia.

Artículo 27°. Funciones del Departamento para la Prosperidad Social.

- a) Articular acciones, programas, proyectos y políticas a cargo del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social o sus entidades adscritas, con la oferta

nacional y territorial, pública o privada que contribuya a la garantía de derechos en el marco de la Política de Estado para el Desarrollo Integral en la Infancia y la Adolescencia.

- b) Diseñar mecanismos de priorización para la inclusión social que oriente la oferta de servicios del Sector de la Inclusión Social y demás sectores de gobierno, en el marco de la Política de Estado para el Desarrollo Integral en la Infancia y la Adolescencia.

Artículo 28°. Funciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

- a) Liderar la implementación territorial de la Política de Estado para el Desarrollo Integral en la Infancia y la Adolescencia en coherencia con la Ruta Integral de Atenciones, en su calidad de ente rector, articulador y coordinador del Sistema Nacional de Bienestar Familiar.
- b) Armonizar los lineamientos de los diferentes servicios y programas a través de los cuales atiende población en infancia y adolescencia, de acuerdo con la Política de Estado para el Desarrollo Integral en la Infancia y la Adolescencia, como entidad encargada de prestar servicios directos a la población.
- c) Promover la armonización y articulación de las líneas de política (Trabajo infantil, Explotación Sexual y Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes – ESCNNA - y prevención del reclutamiento) y demás estrategias nacionales, coordinadas desde las instancias técnicas del SNBF que se orientan a la prevención de vulneraciones y restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes con la Política de Estado para el Desarrollo Integral en la Infancia y la Adolescencia.

Artículo 29°. Implementación Territorial de la Política. La implementación territorial deberá hacerse a partir de las competencias y funciones que los alcaldes, gobernadores y autoridades propias tienen en relación con la garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Su alcance y propósito debe estar en coherencia con lo definido en el marco de la Política de Estado para el Desarrollo Integral en la Infancia y la Adolescencia, principalmente en lo relacionado con el diseño, implementación y seguimiento de la Ruta Integral de Atenciones. En concordancia, los alcaldes y gobernadores deberán ajustar dicha Ruta de acuerdo a los contextos de las niñas, niños y adolescentes, de sus realidades territoriales, e incluirla en sus instrumentos de gestión y planeación territorial.

Los Consejos de Política Social del orden departamental, distrital y municipal, deberán orientar el proceso de implementación de la Política de Estado para el Desarrollo Integral en la Infancia y la Adolescencia, su articulación con otras políticas, y promover la coordinación entre sectores, la construcción de relaciones intersectoriales, la generación de líneas de acción unificadas y la concurrencia y complementariedad entre el orden nacional y territorial.

Parágrafo: Para efectos de la implementación de la política y el ajuste de la RIA a sus realidades territoriales, los gobernadores y los alcaldes deberán tener en cuenta el

diagnostico situacional de la infancia y la adolescencia y las políticas existentes sobre la materia a nivel territorial, armonizando los distintos instrumentos de gestión y planeación con las apuestas Política Nacional de Infancia y Adolescencia como Política de Estado.

Artículo 30°. Participación de las organizaciones de la sociedad civil, academia y cooperación internacional en la implementación de la política de estado. Para lograr la finalidad de la Política de Estado, las autoridades y entidades competentes en los niveles nacional y territorial, promoverán la integración de las organizaciones de la sociedad civil, la academia y la cooperación internacional tanto en el fomento de la participación efectiva de niñas, niños y adolescentes, así como en la formulación, implementación y el seguimiento de la presente Política de Estado.

TÍTULO IV

ARTICULACIÓN DE LA POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL EN LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA CON OTRAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Artículo 31°. Articulación de líneas de política y prevención de violencias hacia niñas, niños y adolescentes. La Política de Estado para el Desarrollo Integral en la Infancia y la Adolescencia, centrada en crear las condiciones de bienestar, acceso a oportunidades e incidencia de las niñas, niños y adolescentes para su desarrollo integral, orientando la acción del Estado hacia la garantía de sus derechos y su protección integral, se constituye como marco de gestión sobre la cual se articulan las líneas de política y estrategias especializadas para la prevención de vulneraciones y violencias, así como el restablecimiento de derechos, tales como: Alianza Nacional contra la violencia hacia niñas, niños y adolescentes y la Estrategia Nacional Pedagógica y de Prevención del Castigo Físico, los tratos crueles, humillantes o degradantes enmarcada en la misma; Prevención y erradicación de la Explotación Sexual Comercial en niñas, niños y adolescentes; Prevención y erradicación del Trabajo Infantil y protección integral al adolescente trabajador; Prevención del reclutamiento de niñas, niños y adolescentes; Estrategia de atención integral para niñas, niños y adolescentes con énfasis en la prevención del embarazo en la adolescencia; Estrategias de prevención de violencias.

Artículo 32°. Implementación articulada de políticas poblacionales. La Comisión Intersectorial para el Desarrollo Integral en la Infancia y la Adolescencia, los Consejos de Política Social, las entidades del orden nacional y territorial que los integran, y los alcaldes y gobernadores propenderán por la articulación, alineación, concurrencia, complementariedad y cooperación técnica para la implementación armónica y articulada de las políticas poblacionales, tales como: Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia, la Política de Juventud, la Política Pública Nacional de Apoyo y Fortalecimiento a las Familias, y demás políticas que resulten transversales con el objetivo de ejecutar acciones de política conjuntas y tendientes al logro de metas de país en materia de niñez y juventud.

TITULO V SEGUIMIENTO Y VEEDURÍA

Artículo 33°. Seguimiento. La Comisión Intersectorial para el Desarrollo Integral en la Infancia y la Adolescencia, los Consejos departamentales, distritales y municipales de Política Social, presentarán un informe anual sobre la implementación de la Política de Estado para el Desarrollo Integral en la Infancia y la Adolescencia, según sus competencias al Congreso de la República, Asambleas Departamentales, Concejos Distritales y Municipales.

De esta misma forma, con el fin de hacer seguimiento solicitarán información correspondiente a las entidades responsables, sobre estado de la participación y fortalecimiento de las niñas, niños y adolescentes participantes en los escenarios creados en el marco del Sistema Nacional de Bienestar Familiar desde las mesas de participación para la infancia y la adolescencia; por la Ley Estatutaria de participación ciudadana 1757 del 2015, la Ley Estatutaria 1885 de 2018 del estatuto de ciudadanía Juvenil, y la Ley 743 de 2002 referente a los organismos de acción comunal.

Artículo 34°. Veeduría ciudadana. En consonancia con lo previsto en la ley 850 de 2003, los ciudadanos interesados podrán conformar veedurías ciudadanas para participar en el seguimiento y vigilancia de la implementación de Política de Estado para el Desarrollo Integral en la Infancia y Adolescencia.

Artículo 35°. Seguimiento al desarrollo integral de la infancia y la adolescencia. La Comisión Intersectorial para el Desarrollo Integral en la Infancia y la Adolescencia, realizará seguimiento nominal de las atenciones brindadas a cada una de las niñas, niños y adolescentes en el marco de la Ruta Integral de Atenciones, a través del Sistema de Seguimiento al Desarrollo Integral.

El sistema permitirá la articulación de la información respectiva a la población en primera infancia, infancia y adolescencia, así como la caracterización y el estado del goce efectivo de sus derechos de manera nominal. La información generada por el Sistema será uno de los principales insumos en la toma de decisiones sobre seguimiento, evaluación y orientación de las acciones para la ejecución de la Política en el orden nacional y territorial. De manera progresiva, se deberá garantizar el reporte de información de las atenciones por parte de todas aquellas entidades del orden nacional y territorial, públicas y privadas, que atiendan niñas, niños y adolescentes de acuerdo con lo establecido por la Comisión Intersectorial para el Desarrollo Integral en la Infancia y la Adolescencia.

Parágrafo 1. Las entidades territoriales estarán obligadas a reportar la información solicitada cumpliendo con los criterios de calidad y oportunidad, de acuerdo a la reglamentación que expida el Gobierno nacional.

Parágrafo 2. Las entidades de la Comisión Intersectorial de Infancia y Adolescencia tendrán a su cargo el reporte permanente de información al Sistema de Seguimiento al Desarrollo Integral.

TÍTULO VI FINANCIACIÓN DE LA POLÍTICA DE ESTADO

Artículo 36°. Financiación. El Gobierno nacional proyectará y garantizará los recursos para la implementación de la Política de Estado para el Desarrollo Integral en la Infancia y Adolescencia, de manera consistente con el Marco Fiscal de Mediano Plazo y el Marco de Gasto de Mediano Plazo.

En todo caso, los recursos presupuestados y las metas de cobertura anualmente no podrán ser menores a los invertidos en la vigencia inmediatamente anterior. La proyección de recursos se hará sobre la base de las metas de cobertura y gestión que se definan en el marco de la Comisión Intersectorial para el Desarrollo integral en la Infancia y Adolescencia, por su parte, las entidades del orden nacional y territorial incluirán en su proceso anual de planeación y programación presupuestal, los recursos destinados para la implementación de la presente política.

Se reglamentarán los esquemas de financiación y cofinanciación entre la Nación y el territorio, para lograr sostenibilidad de la atención Integral en la infancia y la adolescencia, para lo cual las entidades territoriales deberán gestionar y ejecutar oportunamente las fuentes financieras complementarias a los recursos de la Nación.

TÍTULO VII DISPOSICIONES FINALES






Artículo 37°. Ajustes institucionales. Todas las entidades de las que trata la presente ley deberán hacer los ajustes normativos, institucionales, presupuestales y en la oferta de servicios que se requieran para cumplir con las funciones asignadas en el marco de la Política de Estado para el Desarrollo Integral en Infancia y la Adolescencia.

Artículo 38°. Reglamentación. El Gobierno Nacional expedirá la reglamentación de la ley en un término no superior a dos (2) años a partir de la entrada en vigencia, dicha reglamentación establecerá el marco de acciones que permitan la implementación progresiva de lo previsto en la presente ley.

Artículo 39°. Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las normas que le sean contrarias.



RUBY HELENA CHAGÜI SPATH
Senadora de la República
Autora principal

<p>JENNIFER KRISTIN ARIAS FALLA Representante a la Cámara por el Departamento del Meta</p>	 <p>ADRIANA MAGALI MATIZ VARGAS Representante a la Cámara por el Tolima</p>
 <p>ESTEBAN QUINTERO CARDONA Representante a la Cámara por Antioquia</p>	 <p>AMANDA ROCIO GONZALEZ R. Senadora de la República</p>
 <p>JUAN ESPINAL Representante a la Cámara por Antioquia</p>	 <p>CARLOS FELIPE MEJÍA MEJÍA Senador de la República</p>

 <p>EDWARD DAVID RODRIGUEZ R Representante a la Cámara por Bogotá D.C</p>	 <p>JUAN PABLO CELIS VERGEL Representante a la Cámara</p>
 <p>MARGARITA MARÍA RESTREPO Representante a la Cámara por Antioquia</p>	 <p>MILLA PATRICIA ROMERO SOTO Senadora de la República</p>
 <p>ALEJANDRO CORRALES ESCOBAR Senador de la República</p>	 <p>OSCAR LEONARDO VILLAMIZAR M Representante a la Cámara por Santander</p>
 <p>HENRY CUELLAR RICO Representante a la Cámara</p>	 <p>HERNAN HUMBERTO GARZON Representante a la Cámara</p>

 <p>MILTON HUGO ANGULO VIVEROS Representante a la Cámara</p>	 <p>ERNESTO MACÍAS TOVAR Senador de la República</p>
 <p>JOSE JAIME USCÁTEGUI PASTRANA Representante a la Cámara</p>	 <p>DIEGO JAVIER OSORIO JIMÉNEZ Representante a la Cámara Departamento del Quindío</p>
 <p>JOSE VICENTE CARREÑO CASTRO Representante a la Cámara por el Departamento de Arauca</p>	 <p>MARTHA P. VILLALBA HODWALKER Representante a la Cámara</p>
 <p>JULIÁN PEINADO RAMÍREZ Representante a la Cámara Departamento de Antioquia</p>	 <p>ESPERANZA ANDRADE SERRANO Senadora de la República Partido Conservador Colombiano</p>

 <p>Harry Giovanni González García Representante a la Cámara Departamento del Caquetá</p> 	
---	--

Proyecto de Ley ___ de 2021

“Por medio del cual se establece la Política de Estado para el Desarrollo Integral en la Infancia y Adolescencia”

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. Finalidad y alcance

Esta iniciativa legislativa pretende desarrollar los postulados consagrados en los artículos 44 y 45 de la Constitución Política de Colombia. Para ello, propone la adopción de la Política de Estado para el Desarrollo Integral en la Infancia y la Adolescencia, que sienta las bases conceptuales, técnicas y de gestión relacionadas con la generación de las condiciones que promuevan el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes entre los seis (6) y los dieciocho (18) años, en el marco de la Doctrina de la Protección Integral.

Colombia cuenta con importantes desarrollos normativos en materia de Primera Infancia, de allí que, elevar la Política de Infancia y Adolescencia desde un enfoque de curso de vida a este mismo nivel, permitirá disponer de un marco legal y de política que respalde el abordaje integral de los asuntos de niñas, niños y adolescentes en el país y garantice su sostenibilidad política, técnica y de gestión.

En este contexto, los objetivos específicos de este proyecto de Ley son:

- Servir de marco para la implementación de la política en materia de la integralidad que debe asegurarse en las acciones emprendidas por quienes son responsables de garantizar la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
- Ordenar la oferta de los servicios del Estado que promueven el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.
- Facilitar la respuesta intersectorial para el desarrollo integral en la infancia y la adolescencia en el orden nacional y territorial, así como la articulación y la coordinación entre sistemas y sectores, necesarias para su implementación, seguimiento y evaluación.

2. Marco jurídico

Gracias a un trabajo sostenido durante las últimas décadas para avanzar en la protección integral de los derechos de la niñez, Colombia cuenta con importantes logros normativos y

políticos que orientan las decisiones técnicas y de gestión tendientes a generar las condiciones humanas, sociales y materiales que favorecen su garantía plena.

En coherencia, con lo dispuesto por la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, adoptada mediante la Ley 12 de 1991, la Constitución Política de Colombia reconoce la prevalencia de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y define en el artículo 44 la obligación corresponsable entre el Estado, la familia y la sociedad de asistir y proteger a este grupo poblacional, para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. De igual manera, en el artículo 45 dispone el derecho de los adolescentes a la protección y a la formación integral, así como la responsabilidad del Estado y la sociedad para garantizar la participación activa de los jóvenes.

A través de la Ley 1098 de 2006, por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia se define el conjunto de normas sustantivas y procesales para asegurar la protección integral de estos derechos en condiciones de igualdad y de equidad, y orienta que las políticas públicas son el instrumento de su materialización.

El Decreto 936 de 2013 establece que el Sistema Nacional de Bienestar Familiar es el conjunto de agentes, instancias de coordinación y articulación y de relaciones existentes entre éstos, para dar cumplimiento a la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, y al fortalecimiento familiar en los ámbitos nacional, departamental, distrital y municipal.

En el anterior sentido, a través del Decreto 4875 de 2011, posteriormente modificado por el Decreto 1416 de 2018, se creó la Comisión Intersectorial para la Atención Integral de la Primera Infancia (CIPI), para coordinar y armonizar las políticas, planes, programas y acciones necesarias para la ejecución de la atención integral a la primera infancia, siendo ésta la instancia de concertación entre los diferentes sectores involucrados.

En este marco, el país avanza en la transformación de los procesos de formulación, implementación y evaluación de las políticas poblacionales como resultado de la decisión de acentuar su razón de ser en los sujetos a quienes se deben, asumir la integralidad como atributo de las actuaciones y profundizar en el carácter intersectorial de la gestión.

Lo anterior se refleja en la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia “De Cero a Siempre” (Ley 1804 de 2016), a través de la cual el país pone el énfasis de su actuación al servicio de las niñas y los niños entre los cero (0) y seis (6) años de edad, en el favorecimiento de su pleno desarrollo, y consolida la intersectorialidad como el mecanismo idóneo para materializar su atención integral, y en la posterior formulación de manera armónica con lo establecido en dicha ley, de la Política Nacional de Infancia y Adolescencia 2018 – 2030, aprobada por el Consejo Nacional de Política Social en 2018.

Con estas políticas, Colombia asume que el desarrollo de los sujetos durante la niñez está estrechamente ligado con las condiciones relacionales, culturales, sociales, políticas,

económicas, e históricas que están presentes en los entornos donde se encuentran, por lo cual es imprescindible enfocar sus esfuerzos en garantizar que cada niña, niño y adolescente cuente, en cada uno de los escenarios de su vida, con las condiciones y oportunidades que le permitan potenciar sus capacidades, ejercer plenamente sus derechos y configurar sus vidas de acuerdo con sus aspiraciones individuales y responsabilidades ciudadanas.

En el anterior sentido, se hace pertinente fortalecer el marco jurídico que refrende y de soporte legal a los desarrollos técnicos y de política pública que en materia de garantía de los derechos de la niñez el país ha alcanzado, de tal manera que el Estado Colombiano cuente con un plexo normativo cada vez más robusto en torno a los derechos y el desarrollo integral a lo largo del curso de vida, desde la primera infancia hasta la adolescencia.

3. Marco político y técnico

La Política “De Cero a Siempre” (Ley 1804 de 2016), en desarrollo de lo establecido por el Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006), definió la atención integral como el conjunto de acciones planificadas de carácter nacional y territorial dirigidas a promover y garantizar el pleno desarrollo de los niños y las niñas desde su gestación hasta los seis años de edad, articulando y promoviendo la definición e implementación de planes, programas, proyectos y acciones para la atención integral que debe asegurarse a cada niña y cada niño, de acuerdo con su edad, contexto y condición, a través del trabajo unificado e intersectorial desde el enfoque de derechos y la perspectiva de diversidad y enfoque diferencial.

Como resultado del trabajo articulado desde la Comisión Intersectorial para la Atención Integral de la Primera Infancia (CIPI), actualmente el país cuenta con una arquitectura institucional consolidada que permite avanzar desde esquemas de articulación intersectorial en el orden nacional y territorial, en la atención integral cada vez más amplia y pertinente para esta población. Así mismo, la participación activa de actores gubernamentales, la academia, la sociedad civil y la comunidad en general, en la ejecución de esta Política, lo cual ha contribuido a que la primera infancia se ubique como prioridad en la agenda pública del país.

Este compromiso con la primera infancia se refleja, además, en una inversión más organizada para garantizar la atención integral para las niñas y los niños. Con el desarrollo de la Política “De Cero a Siempre”, el gasto público en niñez se ha robustecido cuantitativa y cualitativamente, fortaleciendo las condiciones que desde lo financiero y presupuestal soportan el accionar en el marco de la misma, y lo cual se encuentra respaldado por el Artículo 25 de la Ley 1804 de 2016 el cual establece que *“los recursos presupuestados anualmente no podrán ser menores a los invertidos en la vigencia inmediatamente anterior”*.

Esto ha permitido que el presupuesto asignado para la atención integral a la primera infancia, en los últimos años, se mantenga o aumente para cada una de las entidades que

hace parte de la Comisión Intersectorial para la Atención Integral de la Primera Infancia, lo cual ha facilitado que permanezcan las disposiciones financieras para la implementación de la Política en diferentes vigencias.

Con relación a lo anterior, se ha demostrado que la asignación de recursos que realiza un país para el desarrollo de la niñez, es la inversión pública más efectiva, y que cuanto más se demore, más costoso resultará después el cierre de brechas e inequidades a lo largo del curso de vida. En este sentido, por ejemplo, invertir en educación infantil de alta calidad ofrece mejores resultados para la sociedad y genera efectos intergeneracionales no solo en los logros de las niñas, niños y adolescentes sino ganancias en la vida familiar que generan mayores ganancias personales y sociales que abarcan varias generaciones, lo que permite combatir la pobreza intergeneracional; se logra la reducción de la necesidad de educación especial, menor necesidad de servicios sociales, reducción de costos de la justicia penal y aumento de la autosuficiencia y la productividad de las familias (Heckman, James y Ganesh Karapakula, 2019). Así las cosas, garantizar la sostenibilidad de condiciones que promueven el desarrollo integral a lo largo del curso de vida, resulta estratégico para el desarrollo económico y social del país.

Es importante mencionar que el Comité Internacional de los Derechos del Niño, a través de sus recomendaciones, ha reconocido los progresos del estado colombiano en cuanto a la adopción de la política de primera infancia, y exhorta al país a generar ingentes esfuerzos para avanzar en la garantía del desarrollo integral y los derechos de la población en infancia y adolescencia.

Aunado a lo anterior, es de señalar que en concordancia con los compromisos asumidos por Colombia en el marco de la agenda mundial de desarrollo sostenible Agenda 2030, a través las prioridades definidas en el CONPES 3918 de 2018, el país ratifica su responsabilidad frente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los cuales exigen que cada niña, niño y adolescente cuente con las oportunidades que le permitan potenciar sus capacidades y alcanzar el máximo nivel de garantía de sus derechos.

En este contexto, el país ha avanzado con el propósito de promover el desarrollo integral y la garantía plena de los derechos de la niñez, a lo largo del curso de vida desde la primera infancia hasta la adolescencia.

Es así que, en 2018 se adoptó la Política Nacional de Infancia y Adolescencia 2018 – 2030, con la finalidad de contribuir al desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, generando las condiciones sociales, humanas y materiales que se requieren para favorecer, reconociéndolos como sujetos prevalentes de derechos.

La política se formuló en el marco del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, a partir de un amplio proceso de conversaciones y movilización participativa que involucró la participación de niñas, niños y adolescentes, y actores de gobierno nacional, territorial, sociedad civil, cooperación y comunitarios.

Durante 2019, con el concurso de las entidades competentes, el Gobierno Nacional realizó la construcción de la Ruta Integral de Atenciones para la Infancia y la Adolescencia, la cual se constituye en la principal herramienta de gestión de la Política, al ordenar la implementación de las atenciones en los territorios. Para su puesta en marcha, se avanza en el fortalecimiento institucional, así como en la priorización de acciones que orienten la configuración de oferta que transforme y mejore las condiciones de vida y bienestar de las niñas, los niños y los adolescentes.

Para orientar la gestión de los compromisos adquiridos en agendas internacionales y lograr la implementación de la Política Nacional de Infancia y Adolescencia, el país cuenta con un robusto marco técnico y conceptual en torno al desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes.

Si bien es durante la primera infancia se generan las bases para el desarrollo cognitivo, físico, social y emocional del ser humano y es durante la infancia y la adolescencia que se consolidan dichas bases y se fortalece el desarrollo de habilidades y capacidades para facilitar el aprendizaje posterior en los siguientes momentos del curso de vida.

Afirmar que las niñas, niños y adolescentes son sujetos de derechos significa reconocer en ellos un conjunto de atributos (cualidades, características) que les son inherentes por su naturaleza y dignidad humana, “entendida como autonomía o como posibilidad de diseñar un plan vital y de determinarse según sus características” (Sentencia T-291, 2016).

Esta titularidad implica la capacidad de toma de decisiones y de transformación que tienen las niñas, los niños y adolescentes sobre su destino y el de la humanidad, y por lo tanto da por hecho que su vida tiene valor, sentido y propósito en sí misma. Por ello las niñas, niños y adolescentes tienen valía en el aquí y en el ahora y no por lo que puedan llegar a ser. (Política Nacional de Infancia y Adolescencia, Ruta Integral de Atenciones para la Infancia y la Adolescencia, 2019).

La Política Nacional de Infancia y Adolescencia entiende el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes como un proceso de transformación continuo, complejo y sistémico que vive el ser humano a partir de sus capacidades, habilidades, potencialidades y experiencias, que contribuye a la construcción de su identidad, al logro progresivo de la autonomía para edificar su vida y al afianzamiento de su responsabilidad social.

La infancia supone la experiencia de consolidación y expansión del proceso de desarrollo que se ha venido configurando y construyendo desde la primera infancia, y materializa el tránsito a nuevos desarrollos y aprendizajes que resultan de la potenciación de sus capacidades, lo cual redundará en logros progresivos en la autonomía, independencia y construcción de su identidad, unido a mayores interacciones y riqueza relacional (Política Nacional de Infancia y Adolescencia, Ruta Integral de Atenciones, 2019). Es también un tiempo donde se establecen las bases sobre las cuales se trazarán sus trayectorias de vida

de acuerdo con sus condiciones sociales, económicas, políticas culturales de su entorno (MinSalud, 2015).

En la adolescencia se consolidan procesos cruciales iniciados en la infancia y la primera infancia, entre los cuales están el desarrollo de su autonomía y el ejercicio de la participación; el fortalecimiento de sus competencias, capacidades y talentos, la culminación de la educación básica y media y con ella, el tránsito a la educación pos-media, y su vinculación a la vida productiva. Su capacidad de decisión, el ejercicio de su ciudadanía y su papel activo en el desarrollo social, cultural, económico y político, así como el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos.

Como parte del proceso de construcción identitaria, cada adolescente se replantea su definición personal y social, a través de procesos de diferenciación del grupo familiar y de búsqueda de pertenencia y de sentido de vida. En este momento del desarrollo, el logro de autonomía, la capacidad de reflexión y de la toma de decisiones, los entornos, su relación con pares y su contexto tienen un papel fundamental en la configuración de sus proyectos de vida.

La Política Nacional de Infancia y Adolescencia reconoce en las familias la capacidad para generar condiciones para el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes desde su rol en cuanto al cuidado y la crianza a través del cual construye vínculos significativos que redundan en su posibilidad de existir, interactuar e integrarse como persona y ser social y lo extiende a la interacción con pares, organizaciones y comunidad. En este sentido, resulta indispensable involucrar a las familias e incluso a las comunidades, en las apuestas normativas que buscan promover el desarrollo y la protección integral de la niñez.

El reconocimiento de la titularidad de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, definido en el Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006), implica la capacidad para la toma de decisiones y de transformación sobre su vida. En su Artículo 31 se plantea el Derecho a la Participación, en el Artículo 32 el Derecho a la Asociación y Reunión y en el Artículo 34 el Derecho a la Información.

Con el fin de promover la garantía del derecho a la participación significativa en la niñez y la adolescencia, el país ha consolidado condiciones que desde la institucionalidad generan espacios para su ejercicio, algunas de las más representativas son: los consejos y personerías estudiantiles, establecidas en la Ley General de Educación, Ley 115 de 1994, y el decreto 1860 de ese año; Las Mesas de Participación de Niñas, Niños y Adolescentes, establecidas por el Decreto 936 de 2013 en el marco del Sistema Nacional de Bienestar; Las veedurías sociales juveniles a los servicios de salud amigables para los adolescentes y jóvenes, y claro está, las establecidas en el estatuto de ciudadanía juvenil, Ley Estatutaria 1622 de 2013, Consejos Territoriales, Veedurías de gasto público, Plataformas y Asambleas Juveniles, entre otras. Con el fin de avanzar en la materialización de este derecho, la Política Nacional de Infancia y Adolescencia, a través de las atenciones definidas, fomenta la participación efectiva de la niña, niño o adolescente en igualdad de

oportunidades, en los asuntos que sean de su interés o le involucren en su vida cotidiana, permitiendo su consolidación como sujeto político, la construcción y el ejercicio de la ciudadanía.

En el anterior sentido, elevar la Política Nacional de Infancia y Adolescencia 2018-2030 a Política de Estado, contribuye a que el país consolide el marco normativo que da sustento legal y político, que organiza y respalda la acción del Estado a largo plazo en materia de atención integral a la niñez, desde la perspectiva del desarrollo integral. Esto favorece el afianzamiento de las condiciones de sostenibilidad política, técnica y financiera, para la atención integral de niñas, niños y adolescentes.

4. Situación de las niñas, niños y adolescentes en Colombia

En Colombia, según las proyecciones poblacionales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), para el 2021 se estimó una población de 9.574.384 niñas, niños y adolescentes entre los 6 y 17 años, un 20 % del total de la población; entre los 6 a los 11 años, para un total 4.747.431 de niñas y niños en el ciclo de infancia, y en adolescencia, de los 12 a los 17 años, 4.826.953. Así mismo 1.215.042 niñas, niños y adolescentes, entre los 6 y 17 años de edad, pertenecen a grupos étnicos, de los cuales el 56% son negros o mulatos y el 43% indígenas, entre los que tienen mayor participación. La población con discapacidad entre los 6 y 17 años se estimó alrededor de los 272.895 niñas, niños y adolescentes.

En las últimas dos décadas se evidencia en Colombia un mejoramiento constante de los indicadores sociales y económicos, en armonía con la implementación de las políticas públicas y el desarrollo social y económico del país. Esto se ha traducido en la reducción de la pobreza y la desigualdad hasta 2019, con el incremento de la cobertura y calidad en la educación, el mejoramiento de los indicadores sociales y de salud, así como la disminución de algunas formas de violencia. Entre los años 2012 y 2019, cerca de 175 mil hogares con niñas y niños superaron la pobreza y 85 mil hogares superaron la pobreza extrema (Prosperidad Social a partir de la Gran Encuesta Integrada de Hogares 2012 - 2019 -DANE). No obstante, la pobreza persiste y para 2019 los hogares pobres monetarios con niños y niñas y adolescentes fueron 3 millones 350 mil, 889 mil hogares pobres extremos y 736 mil hogares en pobreza multidimensionales.

De acuerdo con la Base de datos única de afiliados- BDUA, con corte a enero de 2021 se registraron 49.482.644 personas afiliadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud-SGSSS, 3.806.464 de ellas en edades de 0 a 5 años, 4.338.114 niños y niñas entre 6 y 11 años, y 4.767.516 adolescentes de 12 a 17 años, para un total de 12.912.094 niñas, niños y adolescentes, quienes representan el 26% del total de afiliados. (Fuente: Base de datos única de afiliados- BDUA, Corte enero de 2021).

En relación con las atenciones en salud, para el periodo 2015 a 2019 se registraron 50.202.185 personas atendidas, el 45% de ellas fueron niñas, niños y adolescentes, con

predominio del grupo de edad de 6 a 11 años (8.453.271; 17%), seguido por menores de 6 años (7.484.140; 15%) y adolescentes, quienes representaron el 13% del total de personas atendidas (6.658.125). (Fuente: Registro Individual de Prestación de Servicios –RIPS, Consultado el 11 de marzo de 2021).

En materia de educación, según cifras SIMAT, al cierre del 2020, se cuenta con una matrícula preliminar de 10.024.230 niños, niñas y adolescentes. De ellos, 7.837.433 se encuentran en el sector oficial, atendidos en 9.350 establecimientos educativos, y 2.186.797 se encuentran matriculados en el sector no oficial, en 9.863 establecimientos.

De la matrícula general, 2,3% se encuentran en jardín y pre jardín; 7,3% en Transición; 41,5 en primaria, 31,9% en secundaria y 11.1% en media. Los ciclos de adultos partan el 5,9%. Desde el año 2010 se evidencia una tendencia decreciente en el número de estudiantes matriculados, correlacionada con la disminución en la población proyectada por el DANE.

Con el fin de fomentar el empoderamiento de niñas, niños y adolescentes como protagonistas de su propio desarrollo y fortalecer sus habilidades para la vida, a través del potenciamiento de vocaciones, intereses y talentos para la construcción de proyectos de vida, 251.842 niñas, niños y adolescentes han tenido acceso a programas que hacen parte de la oferta institucional del ICBF (Fuente: metas sociales y financieras ICBF, corte a 31 de diciembre 2020).

En cuanto a la garantía de los derechos culturales de la infancia y la adolescencia, se destaca en el 2020 el acceso de 147.567 niñas, niños y adolescentes a las escuelas de música, música para la reconciliación y talleres de escritura creativa en el marco de la oferta cultural y artística en el país (Fuente: Ministerio de Cultura, 2020). Igualmente, 33.310 niñas, niños y adolescentes que acceden a programas de recreación y deporte (Fuente: Ministerio del Deporte, 2020).

No obstante, el progreso que demuestra el país desde la perspectiva de la atención integral para esta población, es evidente que aún persisten retos significativos para garantizar las condiciones que promuevan su desarrollo integral y la garantía plena de sus derechos.

Por un lado, de acuerdo al Boletín estadístico mensual, del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el 2020 se registraron 579 muertes de niñas, niños y adolescentes por homicidio. Así mismo, en 2020, se realizaron 11.320 exámenes médico legales a niñas y niños de 5 a 14 años por violencias sexuales e igualmente, para este mismo año, 3.001 niñas y niños entre 5 y 14 años fueron víctimas de violencia intrafamiliar.

En cuanto al trabajo infantil, de acuerdo con las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en el 2019 cerca de 644.000 niños, niñas y adolescentes estuvieron realizando actividades laborales, algunos, desarrollando actividades por lo menos por una hora, y percibiendo ingresos en pesos o en especie. Los sectores en los

que más se presenta el trabajo infantil son la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, 2019).

De otra parte, las condiciones socioeconómicas de las familias inciden en su capacidad para proteger integralmente a los niños, niñas y adolescentes. Al respecto, vale la pena señalar que entre 2018 y 2019, la incidencia de pobreza monetaria aumentó en 1 punto porcentual, pasando de 34,7% a 35,7%; este aumento se observó tanto en cabeceras como en los centros poblados y la zona rural dispersa, sin embargo, en este último dominio el revés fue más intenso, aumentando la brecha de pobreza entre las dos zonas.

Desde la fuente Censal del 2018, los indicadores de inasistencia escolar, rezago escolar y trabajo infantil evidencian que una de las principales problemáticas que viven niñas, niños y adolescentes entre los 7 a 17 años, está relacionada con el rezago escolar, representada en el 14,9% de la población censada. Seguido de la inasistencia escolar indicando que, del total de la población censada entre los 7 y 17 años, el 2,4% no asiste a la escuela. Estos tres indicadores en el marco de la pobreza multidimensional municipal, desde su referencia porcentual indican que aún en los municipios del territorio nacional, se cuenta con población de infancia que requiere de acciones para la promoción de sus derechos y la prevención de situaciones que afecten su desarrollo integral.

De acuerdo con el ICBF, en los últimos cinco años, el 30% de las niñas, niños y adolescentes desvinculados de grupos armados son niñas, cuya edad media de reclutamiento es de 13 años. La niñez indígena sufre de manera desproporcionada esta vulneración. En el 2017 el 11,76% de las niñas y niños desvinculados del conflicto eran de grupos indígenas, cifra significativa respecto al total de la población indígena del país (3,4%), según el DANE.

Entre el 2017 y el 2020, se registraron 125.400 niños, niñas y adolescentes que ingresaron a Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos (PARD). Entre las principales causas se encuentran aquellas asociadas con violencia sexual (25.6%) y maltrato (17.3%).

Por su parte, los datos del Registro Único de Víctimas (RUV) reportan que, del total de colombianos víctimas, 2.204.752 corresponden a niños, niñas y adolescentes (24.9%); 3.1% de ellos se encuentra entre los 0 y los 5 años, 9,3% entre los 6 y los 11 años y el 11.8% son adolescentes.

La Encuesta Nacional de Situación Nutricional de 2015, indica que el exceso de peso en niños y niñas entre 5 y 12 años presentó un aumento significativo entre 2010 (18,8%) y 2015 (24,4%), es decir 5,6 puntos porcentuales más, situación que se agudiza en todos los departamentos. De manera similar, se comporta la situación de exceso de peso en adolescentes de 13 a 17 años, donde la prevalencia en 2010 era del 15,5% y para 2015 se incrementa en 2,4 puntos porcentuales, llegando a 17,9%, donde 17 departamentos presentan una prevalencia superior al dato nacional.

En cuanto a la salud mental de niñas, niños y adolescentes se ha identificado que la deserción escolar como un problema que afecta a la población escolarizada, particularmente en los niveles de educación media y superior, que a pesar de presentar un aumento en la matrícula en estos niveles, de cada 100 niñas y niños que ingresan al primer año de educación, solo 44 logran graduarse como bachilleres, concluyendo así que la deserción escolar es un factor que incide en la aparición de problemas, trastornos mentales que pueden incidir en el desempeño y el éxito escolar de la infancia, adolescencia y juventud (Suarez & Díaz, 2015, citado en CONPES 3992 de Salud Mental, 2020). Con respecto al consumo de sustancias psicoactivas (SPA), para el 2016 la edad promedio de inicio de consumo de SPA era 13,6 años (Observatorio de Drogas de Colombia, 2016).

La educación y la protección de las trayectorias educativas completas es factor central para el desarrollo armónico e integral en la infancia y la adolescencia. De acuerdo a los datos oficiales, la cobertura bruta a 2019 fue del 104,5% y la cobertura neta del 92%. Haciendo el análisis por niveles, en el nivel de educación media es donde se presentan las tasas de cobertura neta más bajas, con el 47%; por su parte, en la básica primaria la cobertura neta alcanza el 89%; seguida por la básica secundaria con el 79,4% y transición con el 64.4%

La tasa de deserción del sector oficial para ese año fue de 3,1%, la de reprobación del 5,8% y la tasa de aprobación del 91,1%.

Los niños, niñas y adolescentes, estudiantes del sistema educativo en la zona rural representan el 23,4% (2.348.715), lo que representa una disminución en 1 punto porcentual frente al mismo dato en 2010 (24,4%). Si se compara la cobertura neta general y por niveles entre la zona rural y la zona urbana, se hacen evidentes las brechas existentes. A nivel general en la zona urbana la cobertura neta está en el 92,6% y la rural en el 90,5%; por niveles, donde la diferencia es mayor es en el nivel de preescolar, con una diferencia de 13,3% y en el nivel de educación media con una diferencia de 10,2%.

En cuanto al análisis de trayectorias en los establecimientos educativos rurales, la deserción rural es mayor a la urbana. En 2019 la tasa de deserción en la zona rural fue de 3,56%; por su parte la tasa de reprobación fue del 5,1% y la de aprobación fue de 91,34%.

En materia de trayectorias educativas, al analizar y comparar la información de matrícula del año 2015 con la de 2020, el 32% continuaban en su trayectoria en el curso que le corresponde a su edad, el 28% habían culminado la educación media y se encontraban graduados; el 17% se reportaron como ausentes y 18% había repetido algún año escolar. El porcentaje restante transitó a educación de adultos. En la ruralidad, también se ve un efecto negativo al analizar la continuidad en las trayectorias. De los 2,4 millones de los estudiantes matriculados en 2015, para 2020, 30% continuaban en su trayectoria en el curso que le corresponde a su edad, el 20% había culminado la educación media y se habían graduado, el 23% abandonó sus estudios y no volvieron a matricularse y el 24% repetía algún año escolar.

Los principales problemas para la garantía plena del derecho a la educación se encuentran en el área rural y en particular con los adolescentes.

Las desigualdades sobre las niñas y las adolescentes son preocupantes. Se evidencia que en Colombia existe un proceso cultural que las excluye y les restringe las oportunidades para educarse y desarrollar sus capacidades. Lo anterior es más crítico si viven en la ruralidad, son pobres, están en la adolescencia, están embarazadas o pertenecen a una comunidad étnica (Política Nacional de Infancia y Adolescencia, 2018).

De igual manera es relevante considerar la situación de la niñez migrante y refugiada en Colombia, quienes se pueden encontrar en riesgo permanente de que sus derechos sean amenazados o inobservados. De acuerdo a Migración Colombia, en 2020, había 274.683 niñas, niños y adolescentes provenientes de Venezuela.


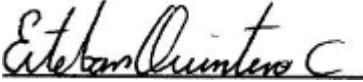



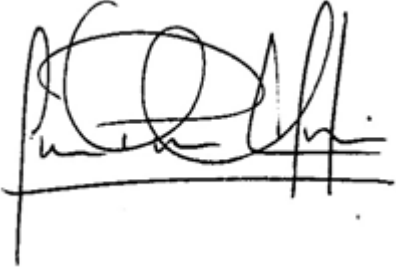


Por último, es pertinente resaltar que la presencia y propagación del COVID-19 en Colombia ha impactado negativamente en el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes. Como lo indica el CONPES 4023 de 2021 “Política para la reactivación, la repotenciación y el crecimiento sostenible e incluyente: Nuevo compromiso por el futuro de Colombia”, dentro de los aspectos con mayores impactos generados por la pandemia, se encuentran los relacionados con la salud mental, la seguridad alimentaria y nutricional, el aumento de pobreza en la niñez, en especial para quienes se encuentran en la ruralidad, son migrantes provenientes de Venezuela, grupos étnicos o con discapacidad (Save the Children, 2020), el acceso a servicios de salud y educación.

Este panorama refleja los avances con los que el país cuenta en materia de garantía de los derechos de la niñez, e igualmente los desafíos aún presentes para que esta población cuente con las condiciones que promueven su desarrollo integral. Reforzar el marco político y legal facilitará la generación de oportunidades para que las niñas, niños y adolescentes cuenten con la garantía plena de sus derechos y desarrollen al máximo su potencial, lo cual contribuye a una mayor movilidad social y al cierre de brechas para alcanzar una sociedad más equitativa.

De los Honorables Congresistas,



RUBY HELENA CHAGÜI SPATH
Senadora de la República
Autora principal

<p>JENNIFER KRISTIN ARIAS FALLA Representante a la Cámara por el Departamento del Meta</p>	 <p>ADRIANA MAGALI MATIZ VARGAS Representante a la Cámara por el Tolima</p>
 <p>ESTEBAN QUINTERO CARDONA Representante a la Cámara por Antioquia</p>	 <p>AMANDA ROCIO GONZALEZ R. Senadora de la República</p>
 <p>JUAN ESPINAL Representante a la Cámara por Antioquia</p>	 <p>CARLOS FELIPE MEJÍA MEJÍA Senador de la República</p>
 <p>EDWARD DAVID RODRIGUEZ R Representante a la Cámara por Bogotá D.C</p>	 <p>JUAN PABLO CELIS VERGEL Representante a la Cámara</p>
 <p>MARGARITA MARÍA RESTREPO Representante a la Cámara por Antioquia</p>	 <p>MILLA PATRICIA ROMERO SOTO Senadora de la República</p>

 ALEJANDRO CORRALES ESCOBAR Senador de la República	 OSCAR LEONARDO VILLAMIZAR M Representante a la Cámara por Santander
 HENRY CUELLAR RICO Representante a la Cámara	 HERNAN HUMBERTO GARZON Representante a la Cámara
 MILTON HUGO ANGULO VIVEROS Representante a la Cámara	 ERNESTO MACÍAS TOVAR Senador de la República
 JOSE JAIME USCÁTEGUI PASTRANA Representante a la Cámara	 DIEGO JAVIER OSORIO JIMÉNEZ Representante a la Cámara Departamento del Quindío

 <p>JOSE VICENTE CARREÑO CASTRO Representante a la Cámara por el Departamento de Arauca</p>	 <p>MARTHA P. VILLALBA HODWALKER Representante a la Cámara</p>
 <p>JULIÁN PEINADO RAMÍREZ Representante a la Cámara Departamento de Antioquia</p>	 <p>ESPERANZA ANDRADE SERRANO Senadora de la República Partido Conservador Colombiano</p>
 <p>Harry Giovanni González García Representante a la Cámara Departamento del Caquetá</p> 	